



XXXV JORNADAS ACADÉMICAS
DE LA COMISIÓN DE ABOGACÍA JOVEN
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AÑO 2024

COMISIÓN: DERECHO PENAL

TEMA: “La falta de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal: impedimentos al ingreso del régimen de progresividad de la pena de los condenados”

Dra. Visco Micaela Belén

Colegio de Abogados de La Matanza

Sumario: I.-Abstract; II.-Introducción; Desarrollo: a) Sobrepoblación carcelaria; b) Progresividad del régimen penitenciario c) Dificultades a la hora de confeccionar los informes; III.-Conclusión; IV.-Propuesta

I. Abstract

La ley 24.660 más conocida como ejecución de la pena privativa de la libertad, sancionada en 1996, tiene como objetivo lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando la reinserción social.

Asimismo, y en particular este trabajo tendrá un enfoque en el régimen de progresividad, conducta y objetivos que deben cumplir los condenados para comenzar a solicitar las diversas opciones que establece el ordenamiento para recuperar su libertad personal antes del vencimiento de su condena, que, en la actualidad por la falta de cupo que hay en las cárceles a consecuencia de la sobrepoblación se ven imposibilitados a su acceso.

Resaltando que toda imposibilidad sobre su goce propina al reo una grave lesión dentro del tránsito por el proceso modula en su perjuicio un castigo más duro que el establecido para el caso concreto por el Tribunal que dictó su sentencia —arts. 40 y 41 del C.P.—, atenta contra la aludida finalidad resocializadora del encierro carcelario y corporiza un trato cruel, inhumano o degradante. Situación que no puede seguir ocurriendo y merece urgente una alternativa y respuesta por parte del Estado.

II. Introducción

Como se ha mencionado el objetivo del cumplimiento de la pena es la resocialización o readaptación social del penado.

En este sentido se sostiene que “el tratamiento penitenciario debe procurar la resocialización del penado para convertirlo en un elemento útil a sí mismo y a la comunidad y en condiciones de ofrecer a ésta beneficios positivos de recompensa”.¹

Para satisfacer ese objetivo de resocialización no basta solo con el sistema de tratamiento penitenciario regulado en el art 6 de la ley a través del régimen progresivo, sino que también es necesario un apoyo postpenitenciario para que el liberado no sea rechazado socialmente.

Este fin está en completa armonía con lo normado por nuestra constitución reformada, sobre la finalidad de la pena, mediante la cual los tratados sobre derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional.

En este sentido el art 5, ap. 6 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”²; de la misma manera el Pacto Internacional de

¹ García Torres Kent, La pena en nuestro país. Reflexiones sobre su actual crisis. Algunas propuestas de solución, LL, 1985-A-765.

² Texto disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm>

Derechos Civiles y Políticos³ en su art 10 ap. 3 establece que “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados..”

Sin embargo, la realidad de las cárceles argentinas, fundamentalmente por la sobrepoblación conspira para que esto suceda.

III. Desarrollo

a) Sobrepoblación carcelaria

Mencionar que el sistema carcelario de la República Argentina presenta problemas estructurales hoy, es más que redundante. Con una población carcelaria total cercana a las 100.000 personas, Argentina se ubica por encima del promedio mundial en cuanto a la cantidad de personas privadas de libertad sobre la población base (232 y 181, respectivamente, para 2018)⁴

La falta de infraestructura adecuada, la sobrepoblación, y el hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos de salud e higiene, la aplicación sistemática de torturas, los insuficientes recursos materiales y humanos emergen como los principales problemas a afrontar.

El sobre encarcelamiento se sustenta en el uso abusivo de la prisión preventiva, el 50% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías estaban detenidas sin condena. En el extremo opuesto, el otro gran problema: la falta de acceso a medidas de morigeración de la pena, los juzgados de ejecución penal rechazan 8 de cada 10 pedidos. Hoy el 70% de las personas detenidas se va con la pena cumplida, es decir, el principio de progresividad de la pena es un derecho casi extinto en la administración de justicia provincial y federal.

En comisarías la sobrepoblación también tuvo un descenso significativo: pasó del 252% al 95%, también se logró por primera vez que no se alojen personas en las 21 comisarías clausuradas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estos avances mejoran la situación, pero no cambian el contexto que permite la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos.

La política de seguridad, basada en la saturación policial de los territorios, se mantiene sin variaciones; cada vez más policías para el control de las poblaciones más vulnerables, especialmente jóvenes pobres. Ese control policial no se despliega para prevenir el delito sino para regularlo; eso impacta directamente en la tasa de encarcelamiento y amplía los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios policiales en su accionar.

³ Texto disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

⁴ Texto disponible en: <https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/carceles/>

Esto queda en evidencia si se mira las estadísticas de aprehensiones: entre 2019 y 2022, la Policía Bonaerense aprehendió en promedio 285.520 personas por año; sólo el 14% fueron imputadas por un delito y el 6% ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense por el dictado de condena o prisión preventiva. Es decir, el 84% de las aprehensiones policiales no están vinculadas al delito.

b) Progresividad del régimen penitenciario-Ley 24.660 y decretos reglamentarios

El art 6 del ordenamiento en estudio establece que el régimen penitenciario se basará en la progresividad y abarcará distintos periodos o fases: de observación; de tratamiento; de prueba y de libertad condicional. (art 12)

“Art. 6: El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas O a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.”

En cuanto a como podemos entender el concepto de progresividad García Basalo afirma que se deberán reunir tres características distintivas:

- i. División del tiempo de la sanción penal en partes que, llámense grados, periodos, fases o de cualquier otro modo, para que tengan razón de ser, deben tener un contenido propio, diferente en alguno de sus elementos o métodos del grado, período o fase que lo precede o sucederá.
- ii. Avance, detención o retroceso a través de los grados, periodos o fases, mediante una valoración actualizada del condenado. Esta evaluación, puramente objetiva hasta caer en lo mecánico en las técnicas iniciales recordemos el sistema de marcas o vales-, por la introyección criminológica que experimenta el régimen penitenciario, consiste en un juicio sobre el grado de rehabilitación alcanzado.
- iii. Posibilidad de la incorporación social del penado antes del vencimiento del título ejecutivo.⁵

Entonces es así como en el art. 12 se establecen los periodos de progresividad que deberán ser cuatro: a) periodo de observación; b) periodo de tratamiento c) periodo de prueba d) periodo de libertad condicional.

Para llevar adelante el primero de ellos es menester que los establecimientos deben contar, como mínimo, con un organismo técnico-criminológico, del que forma parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social, y en lo posible por un educador y un

⁵ García Basalo, El régimen penitenciario argentino, p. 31.

abogado, todos ellos con especialización en criminología y en disciplinas afines. Serán los encargados de elaborar un informe que se reservara en la historia criminológica del penado.

Si bien el reglamento prevé, de acuerdo a lo normado en el art. 6° por la ley nacional, la adopción de la ejecución de la pena a un régimen progresivo, lo cierto es que lo supedita a “su evolución favorable en el desarrollo del tratamiento”, parece coherente con el propio sistema, que, en su conjunto, exige para el tránsito de las distintas fases y períodos, un dictamen criminológico favorable. Resulta arbitrario, respecto de aquel establecimiento que no tenga disponibilidad suficiente para aplicar ciertas actividades terapéutico asistenciales sujetas a aquellos objetivos que debieran ser inicialmente determinados, le exija al interno por medio de sus organismos criminológicos, no haber removido factores de su persona vinculados al delito (controlar sus impulsos, demostrar arrepentimiento, etc...), propio de un determinado tratamiento, como condición de avance en la progresividad de la pena. Por otro lado, de hacerlo, sortearía el debido proceso legal que lo determina; es decir, que dicho tratamiento debió previamente ser consentido, individualizado respecto de las demandas personales y, particularmente, programado

c) Dificultades a la hora de confeccionar los informes.

Al abordar este tópico no podemos pasar por alto que si bien se dan casos que encastran a la perfección en la manda legal, hay muchos otros que denotan serios problemas a la hora de armonizar el texto legal con los datos de la realidad carcelaria; y de acuerdo con el criterio que se adopte se delineará el alcance del beneficio en estudio: ampliándolo o acotándolo.

Los datos son reales y contundentes ya que personalmente me toca luchar en el ejercicio profesional por aquellos condenados que se encuentran cumpliendo sentencias firmes en comisarias y alcaldías, es decir, sin ser ingresados al servicio penitenciario.

Destacando que, se encuentran en el plazo legal oportuno para comenzar a solicitar las salidas alternativas previas al cumplimiento de la totalidad de su condena sin embargo no pueden avanzar en ese régimen toda vez que por la falta de cupo y sobrepoblación carcelaria no son ingresados al sistema, como así también una vez ingresados deberán cumplir un mínimo de 3 periodos de informes de conducta y concepto, los cuales conforme al reglamento penitenciario son realizados cada 3 meses, teniendo que obtener una calificación de conducta 10 y concepto 5 para que el informe del cuerpo interdisciplinario sea favorable y así el juez resuelva otorgar cualquiera de las alternativas que se solicitan.

Otra dificultad a la que nos vemos obligados a enfrentar es que más allá que el Servicio penitenciario posea ese cuerpo técnico interdisciplinario no existe un acompañamiento diario toda vez que los profesionales asisten 1 vez por mes a realizar las entrevistas con los internos. Completamente contrario a lo regulado por la normativa.

No pueden ser oponibles al condenado las capacidades limitadas por el establecimiento penitenciario, sino que esa ausencia de medios o herramientas concretas y la incidencia de circunstancias estructurante en los malos tratos aplicados (traslados reiterados, aislamiento continuo) deberán estar estrictamente correspondidas en el control de motivación que el juez de ejecución deba hacer del dictamen criminológico.

IV. Conclusión

A modo de conclusión, con el desarrollo del presente artículo se vislumbra que son muchos más los casos en la actualidad que ven coartados sus derechos a acceder al régimen de progresividad de la pena con el fin de obtener los informes necesarios para reintegrarse al medio libre. Mas grave aun es en las penas cortas de 6 meses a 1 año de efectivo cumplimiento, toda vez que si partiéramos de la idea de que toda pena corta conlleva la afectación al principio constitucional de reinserción social por cuanto no alcanza el tiempo para perseguir este fin y el efecto es solo desocializador, la única posibilidad de concretar este fin sería por medio de la inclusión y abordaje del condenado en el ámbito comunitario, tal como lo promueven las Reglas de Tokio.

Sin esta posibilidad concreta de egreso anticipado, no resta más para el condenado que la opción de aguardar en encierro el fin de su pena, lo cual es rotundamente contrario al fin de reinserción social que plantea nuestra Constitución.

“No hay sistema penal y de encierro que resuelva la cuestión social de manera justa. Al desafío de luchar contra la desigualdad y pobreza que crecen, debemos darle carnadura con una política criminal con perspectiva de derechos humanos que cambie la dirección sostenida de manera transversal por todos los gobiernos en los últimos 25 años”⁶

V. Propuesta

A) Elaborar un proyecto con el fin de crear una institución externa al sistema del servicio penitenciario integrada por cada área que debe realizar los informes criminológicos (psicólogo; psiquiatra; asistente social a los internos que se encuentran cumpliendo condena ya sea en alcaldías, comisarias etc. Ello con el fin de suplir la falta de ingreso al sistema penitenciario y como consecuencia al régimen de progresividad.

⁶ Texto disponible en: <https://www.comisionporlamemoria.org/viejos-problemas-sin-solucion-la-politica-criminal-requiere-cambios-urgentes/>

B) Que a los fines de proteger los derechos que le asisten a los condenados las judicaturas acepten informes realizados por especialistas de forma particular que incluyan todas las áreas necesarias para dar cumplimiento a lo regulado en la ley.

Dra. Visco Micaela Belén

Colegio de Abogados de La Matanza